

# Uribismo agrario, capitalismo burocrático y el modelo Carimagua

Expositora: Carolina Mosquera Vera

## Referencias bibliográficas:

### Principal:

Héctor Mondragón<sup>1</sup> (2005). Efectos del modelo autoritario de Álvaro Uribe Vélez en los derechos de los campesinos. En: *El campo una carta por jugar*, 51-70. Perspectivas de la agricultura colombiana. ILSA. Bogotá.

### Secundarias:

Cecilia López Montaña:

- > (2008): Carimagua, un modelo desplazador.
- > (2010): Uribismo rural: Un modelo agrícola perverso.

Héctor Mondragón:

- > (2007): Carimaguas por miles
- > (2007): Biocombustibles y relaciones de dominación.
- > (2008): Carimagua: los desplazados como mano de obra barata.

La exposición está dividida en cuatro momentos, en el primer momento se explica la tesis de Mondragón sobre la combinación de la violencia y la institucionalización del despojo mencionando los hitos jurídicos pertinentes. En segunda medida se debate el imaginario que rodea el modelo agrario colombiano, lo que nos lleva al tercer punto referido a la caracterización del tipo de capitalismo y de modelo que hace curso en Colombia acompañado del análisis de Cecilia Montaña y, cerramos con una lectura de la actualidad agraria a propósito del proyecto de Ley de baldíos.

La idea fuerte de Mondragón consiste en demostrar que la historia de Colombia ha estado históricamente marcada por el despojo de tierras mediante la combinación de la violencia con la institucionalización institucionalización del despojo.

---

<sup>1</sup> Economista, periodista, investigador y asesor de la Convergencia Campesina, Negra e Indígena.

Para sustentar lo anterior acude a una radiografía de la legislación agraria básica que se puede caracterizar en 4 grandes momentos, de un lado de la balanza se encuentra la Ley 200 de 1936 la cual procuró evitar los frecuentes despojos, ordenando dos cosas: Exigía acreditar la propiedad de la tierra en los últimos veinte años y por otro lado decretó la función social de la propiedad, que significaba que la tierra debía ser explotada o era vulnerable a extinción adquisitiva de dominio.

Desde el otro lado de la balanza encontramos tres momentos legislativos importantes, el primero fue el decreto legislativo 290 de 1957 el cual legalizó las tierras obtenidas durante La Violencia, mucho más adelante Mondragón sitúa la Ley 160 de 1994 que toma un nuevo año de partida para la validación de predios. Finalmente caracteriza todo el cuerpo jurídico de la contrarreforma agraria enmarcado en los gobiernos de AUV, allí se lanzaron 4 leyes a saber: La Ley 791 y 793 de 2002, Ley de Alternatividad Penal (primigenia Justicia y Paz) y la Ley 812 del Plan de Desarrollo, en resumidas cuentas la pretensión tras estas leyes fue garantizar la impunidad a los actores del despojo, eliminar el derecho inalienable a la tierra de los indígenas y afro y posibilitar el blanqueamiento de capitales provenientes del despojo y el narcotráfico.

Este desolador panorama está sustentado por un imaginario específico que desde los grupos dominantes se ha construido alrededor del campesinado colombiano, la ideología según la cual la eficiencia y la rentabilidad solamente pueden provenir de las grandes empresas y de que los campesinos son esencialmente ineficientes y atrasados. En este sentido el papel de los campesinos y enfáticamente de los desplazados (hijos del despojo), durante el gobierno de AUV ha sido el de peones de los empresarios, al respecto el ex ministro Arias advertía en una rueda de prensa “Si esto no es con empresarios invirtiendo en el campo no lo sacamos adelante”.

No obstante, los campesinos son los que más producen en menor cantidad de área sembrada y los que mejor resisten la crisis agraria. Ante esto el autor señala que los campesinos no han sido derrotados por las leyes de la economía porque la gran propiedad no ha modernizado la agricultura, se trata de una gran propiedad latifundista de carácter esencialmente especulativo; inevitable recordar a Mariátegui cuando nos dice en los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana que el propietario criollo tiene en la cabeza primero el concepto de renta que el de producción.

Lo anterior nos ubica en la caracterización del modelo que hace curso en el país, Mondragón le llamará capitalismo burocrático mientras que Cecilia López lo denomina el

Modelo Carimagua, éste limita su accionar a tres pasos fundamentales: creación/usurpación/compra de enclaves productivos que eleven la renta, que, camuflados tras una superflua actividad agropecuaria (Palma<sup>2</sup>, caña y demás islas de la modernidad), permitan acceder a recursos estatales y de cooperación internacional.

Inclusive López destaca al respecto la consolidación del modelo de los empresarios de la política; en la medida que se ha vuelto modalidad invertir en campañas para recibir grandes prebendas del estado y aumentar su riqueza. Es decir que la política se perfila como esfera de la acumulación.

Lo que Carimagua pone en evidencia es esa política que determina burocráticamente la “rentabilidad” de empresarios afines al régimen e imponen la sustitución de propietarios y los intereses del capital transnacional que intenta sustituir la producción nacional de alimentos por la de agrocombustibles y establecer sus megaproyectos, a costa de los desplazados y de quien se les atraviese.

Así las cosas, los desplazados suministrarán la mano de obra bajo un sistema de aparcería, feudalismo del siglo XXI con trabajadores baratos garantizados por el desplazamiento, como si fueran libres de vender su fuerza de trabajo. Dicho trato de parte del gobierno con estas poblaciones, desconoce el derecho a la reparación y restitución y convierte a los desplazados en mano de obra barata.

La reactivación del carácter especulativo convierte al país en cuna de proyectos transnacionales y garantiza la imposición alimentaria del país, yendo en detrimento de la soberanía e incluso la seguridad alimentaria.

### **Bajo este panorama ¿Qué lectura hacer sobre la propuesta de Ley de baldíos?**

Algunos de los puntos problemáticos de la propuesta son:

1. Creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE).
2. Eliminación del artículo 72 de la Ley 160 de 1994 que impedía poseer más de una UAF proveniente de baldíos.

---

<sup>2</sup> ¿Por qué Palma? Porque permite encubrir el latifundio especulativo, disfruta créditos internacionales y exenciones de impuestos, e impone relaciones semif feudales de los latifundistas sobre los campesinos, y en tanto cultivo de tardío rendimiento permite el lavado de capitales proveniente del narcotráfico.

### 3. Creación del Fondo de Desarrollo Rural y Económico el cual financiaría las ‘alianzas productivas’.

Lo anterior no parece sino ratificar el modelo de capitalismo burocrático<sup>3</sup> impulsado con todo vigor por AUV, ya que se posibilita la acumulación, se incentiva el carácter rentístico de la burguesía nacional y se olvida una vez más al campesinado dentro de la vocación productiva del país, porque pasan a ser proletarios rurales los cuales para entrar en la “alianza productiva” deben endeudarse y cargar con los riesgos de las cosechas. Esto le permite a los empresarios ejercer el oligopolio del producto e imponer los precios de éste, a la vez que garantizar la superexplotación del campesinado.

Como insumos para el debate planteo la discusión sobre la fragmentación de las políticas encaminadas a los campesinos, como la Ley de tierras y Justicia y paz; creemos sin una articulación orgánica entre políticas y ministerios, la política pública se convierte en el mejor de los casos en pañitos de agua tibia y en el peor de éstos en la revictimización del campesinado.

Por otro lado se discute el papel de la jurisdicción para pelear los derechos campesinos, ya que si bien ha habido leyes progresistas, no lo es menos que el desacompañamiento entre Ley y fuerza de la Ley ha imposibilitado que dichas plataformas se ejecuten e inciden positivamente sobre los mundos de vida de las familias campesinas.

---

<sup>3</sup> Parece ser la generalización del modelo de Indupalma.